
INFLUENCIA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TÉCNICO EN LA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA Y SU RELEVANCIA EN LAS DECISIONES DEMOCRÁTICAS

JOSEP VIVES-REGO
FRANCESC MESTRES

El desarrollo tecnocientífico de las últimas décadas no sólo ha cambiado la calidad de vida y también los riesgos de la ciudadanía, sino que hace más compleja la actuación democrática, tanto a nivel de ciudadanía como de los dirigentes políticos. La incorporación en política de las opiniones y consejos de expertos y agencias establece nuevas pautas del discurso, la crítica, las decisiones y la comunicación entre políticos, expertos y ciudadanos. En consecuencia, aparecen nuevas maneras de tomar decisiones y de articular el poder político con los expertos y la ciudadanía. En este trabajo se analiza y discute en qué medida la incorporación de los expertos en la praxis política genera desplazamientos del poder y la crítica, al tiempo que se dan pautas para responder a las preguntas del foro de *Ludus Vitalis* "Ciencia y democracia". La exigencia democrática de gobernar por y para el pueblo, exige tener acceso a los expertos y por tanto depender políticamente de ellos en mayor o menor medida, partiendo de la base de que su opinión puesta al servicio de la política mejora la gobernanza.

No ponemos en duda que un político está legitimado para gobernar si ha sido elegido democráticamente, pero esa misma legitimidad democrática no garantiza *per se* que el escogido por el pueblo sepa resolver los problemas a los que se enfrenta. Es a partir de ese momento cuando el poder debe y necesita acceder al conocimiento de los expertos científicos y técnicos para alcanzar o aproximarse a verdades de orden particular o general a través del *logos* (palabra razonada). Este acercamiento entre política y conocimiento tecnocientífico implica que ambos tienen la responsabilidad de informar públicamente con datos y hechos reales, claros y objetivos, que no enmascaren la realidad social y política.

Departamento de Genética, Microbiología y Estadística, Facultad de Biología, Universitat de Barcelona, Barcelona, España. / temivives@telefonica.net
Departamento de Genética, Facultad de Biología, Universitat de Barcelona, Barcelona, España.
/ fmestres@ub.edu

Aunque el método científico es una de las diversas formas que tenemos los humanos para adquirir nuevos conocimientos (Ayala, 2008), debe recordarse que, por su propia definición, la ciencia no puede llegar nunca a una verdad absoluta¹. Esta característica del sistema científico constituye una parte integrante de su esencia que, junto con el principio de la variabilidad, exige la utilización de la estadística matemática para una adecuada interpretación de los hechos (Mestres y Vives-Rego, 2015, 2016). En tales circunstancias, la pregunta crucial es: ¿Las decisiones políticas democráticas son correctas por ser democráticas o por haberse fundamentado en el conocimiento aportado por los expertos?

El papel de los expertos debe entenderse desde dos perspectivas. La primera es facilitar la toma de las mejores decisiones políticas posibles y la segunda es asentar el derecho a la información libre y veraz como pilar de cualquier sistema democrático. Es por tanto necesario paliar la posible manipulación de los medios de información, que nos abocaría a una “democracia mediática” y al consecuente “gobierno por o de la audiencia”, que conllevaría que acabaría gobernando quien consiguiese más audiencia. Cuando los medios de comunicación y los partidos políticos interactúan defendiendo cada uno sus intereses, es frecuente que los ciudadanos constituyan una audiencia pasiva. Byung-Chul² (2015) llega más lejos al manifestar que:

El neoliberalismo convierte al ciudadano en consumidor. La libertad del ciudadano cede ante la pasividad del consumidor. El votante, en cuanto a consumidor, no tiene un interés real por la política, por la configuración activa de la comunidad. No está dispuesto ni capacitado para la acción política común. Sólo reacciona de forma pasiva a la política, refunfunándose y quejándose, igual que el consumidor ante las mercancías y los servicios que le desagradan. Los políticos y los partidos también siguen esta lógica de consumo. Tienen que proveer. De este modo, se degradan a proveedores que han de satisfacer a los votantes en cuanto consumidores o clientes.

Tampoco debe tolerarse que en los medios de comunicación aparezcan falsedades respecto a temas científicos, como el calentamiento global (algunos políticos influyentes lo han negado en público) o económicos, como el del futuro de ciertos países (por ejemplo, la falta de veracidad en la campaña a favor ‘*Brexit*’ del Reino Unido). En tales circunstancias, el papel de los expertos es crucial, puesto que son la única manera de ajustar las opciones políticas y las demandas de los ciudadanos en un marco coherente y realista que haga que las posibilidades de resolver los viejos y los nuevos problemas sean mayores. Es decir, cuando políticos y ciudadanía adoptan actitudes pasivas y hacen de la política un producto de mercado, limitándose a hacer propuestas reiteradas o novedosas pero sin aportar los datos de su fundamentación, están pervirtiendo la política.

Tradicionalmente, las relaciones entre expertos, políticos y ciudadanos se describen como la manera de transmitir la verdad científica (no la filosófica ³) al poder político y a la sociedad. No cabe duda de que el conocimiento de los expertos fortalece la efectividad de la política, pero también desplaza y transforma el propio poder al asociar la legitimidad de la acción política a la credibilidad de la observación. En cualquier caso, es comprensible y deseable que los políticos recurran a los expertos cuando tienen que tomar decisiones de las que no son o se sienten competentes. Sin embargo, los expertos, al igual que los políticos, pueden tener intereses y sus opiniones pueden estar sesgadas, por lo que el problema de las relaciones entre expertos y políticos es un problema de poderes, conocimiento y de cómo se organizan y distribuyen esas relaciones en la elaboración de las decisiones. Un problema no menor pendiente de resolución es la dificultad de controlar democráticamente el ámbito de los expertos y sus límites de actuación.

En muchos países es un hecho que los avances en políticas públicas de las últimas décadas se han basado en líneas de actuación desarrolladas por expertos. Ello explica el creciente número de agencias independientes que asesoran al sector político. No podemos entrar en los detalles del funcionamiento y contradicciones entre políticos, agencias, expertos y ciudadanía, y para ello aconsejamos el análisis de Colomer (2015). Otro problema es que la politización de las opiniones de los expertos se entremezclan de manera sutil con los valores y las políticas de intereses, haciendo que la frontera entre la politización y despolitización de las opiniones de los expertos sea difícil (cuando no imposible) de establecer.

En ese contexto, un tema que todavía dista de estar resuelto en las democracias deliberativas es la tensión entre las fuentes de legitimidad y las de autoridad vinculadas a los expertos. Como acertadamente Broncano⁴ dice:

Dado que los razonamientos tarde o pronto deben atender a la verdad o a la evidencia, las fuentes de autoridad tienen un origen epistémico; dado que la limpieza democrática se basa en el seguimiento de las normas que los ciudadanos acuerdan darse a sí mismos, y sólo en ellas, las fuentes de legitimidad tienen un origen procedimental. La tragedia nace de las dificultades para distinguir y armonizar ambos componentes.

Entendemos que aquellos que al seguir las reflexiones de numerosos pensadores desde Protágoras hasta Kant y Habermas, asumen que la fuente de autoridad reside en la legitimidad democrática, es decir, que el pueblo no se equivoca cuando la decisión se ha tomado de manera procedimentalmente correcta, se sitúan en una zona de elevado riesgo político. El pueblo puede equivocarse y gravemente.

Desde nuestra perspectiva, es fundamental aplicar la noción de coproducción que definimos como la necesidad de democratizar el trabajo de los expertos, pero también de “expertizar” (*expertization* en inglés) la democracia. Por tanto, no nos queda más remedio que asumir la postura de Dewey⁵, quien abogaba por una opinión pública plenamente informada mediante la comunicación efectiva entre ciudadanos, expertos y políticos, donde estos últimos son plenamente responsables ante la ciudadanía de las políticas adoptadas. La política no sirve únicamente para dar una respuesta positiva e inmediata a las demandas, sueños o ideales de la ciudadanía. Ese tipo de respuestas a la luz de la historia serían calificables de mágicas o milagrosas. Entendemos, junto con Dewey, que la política a largo plazo sirve para experimentar de qué modo los sueños, ideales o aspiraciones encajan o no con la realidad; por qué no encajan y qué enseñanzas obtenemos cuando fracasan las actuaciones sociopolíticas destinadas a satisfacer las aspiraciones de la sociedad. La política es una batalla permanente entre la realidad y las aspiraciones. Entendemos que es irrenunciable que los expertos aconsejen e informen tanto a los políticos como a la ciudadanía, pero corresponde a los políticos la responsabilidad última de decidir y actuar. Otro elemento crucial es que los expertos, que aportan su consejo o propuestas, deben hacerlo de manera precisa y comprensible tanto para el político como para la sociedad. Este tema es difícil, puesto que la comprensión no siempre es fácil en temas tecnocientíficos. Es responsabilidad de científicos y de técnicos llevar a cabo la importante tarea de divulgar sus investigaciones y conocimientos a la sociedad.

Concluimos diciendo que en pleno siglo XXI, la presencia y actuación de los expertos en el ámbito político produce transformaciones y desplazamientos tanto del discurso y la crítica, como del propio poder y las decisiones políticas, ya que políticos, expertos y ciudadanía deben compartir esos ámbitos. Queremos responder a las dos preguntas que centran el foro diciendo que un elemento de la política avanzada es facilitar que los ciudadanos incorporen el espíritu científico en los debates públicos, y que aunque ello no sea condición *sine qua non* para que haya democracia, sin lugar a dudas la fortalece.

NOTAS

- 1 Es lo que se denomina el “principio de la indeterminación” o incertidumbre, por el que se asume que es imposible que se conozcan en su totalidad y con absoluta precisión la universalidad de las cosas.
- 2 Byung-Chul, H. (2015), *Psicopolítica*, Barcelona: Herder editorial, pag. 23.
- 3 Históricamente, y al contrario que la verdad científica, la verdad en filosofía resulta inaprensible y huidiza. Desde los presocráticos hasta la filosofía contemporánea la verdad filosófica se ha identificado con diferentes conceptos, aunque en política, la verdad se identifica mayoritariamente con utilidad, sobre todo desde la perspectiva del pragmatismo.
- 4 Broncano, F. (2014), “La autoridad técnica de/en las democracias”, en *Figuras de la dominación*. J. M. Bermudo (coordinador). Barcelona: Horsori Editorial, S.L., pag. 65.
- 5 “Dewey’s political philosophy” en <http://plato.stanford.edu/entries/dewey-political/> sección 4 Democracy. Visualizado el 25 mayo 2016.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ayala, F.J. (2008), *Darwin y el diseño inteligente. Creacionismo, cristianismo y evolución*, 2a ed. Madrid: Alianza Editorial.
- Berger, P.L. y Luckmann, T. (1986), *La construcción social de la realidad*, Madrid: Amorrortu Editores.
- Bourdieu, P. (1990), *Language as symbolic power*, Cambridge: Polity Press.
- Broncano, F. (2014), “la autoridad técnica de/en las democracias,” en *Figuras de la dominación*, J. M. Bermudo (coordinador), Barcelona: Horsori.
- Byung-Chul, H. (2015), *Psicopolítica*, Barcelona: Herder.
- Colomer, J.M. (2015), *El gobierno mundial de los expertos*, Barcelona: Anagrama.
- Mestres, F. y Vives-Rego, J. (2015), “Ciencia y justicia: uniendo lo mejor de ambos mundos”, *Revista Electronica de Ciencia Penal y Criminología* 17-04: 1-12.
- Mestres, F. y Vives-Rego, J. (2016), “Justicia y ciencia: avanzando juntas para construir un mundo mejor”, *Revista Inclusiones* 3: 10-27.